

El proceso de desarrollo de la mayoría de los pueblos del mundo, considerado en términos modernos o, más precisamente expresado, en términos del imperialismo de hoy, no obstante los impresionantes avances que se han experimentado durante el último cuarto de siglo en todos y cada uno de los campos del acontecer socioeconómico y político —aun en las áreas que a finales de la década de los años cincuenta eran consideradas como prácticamente al margen del desarrollo histórico—, pasa por la independencia política, fenómeno éste que en los términos que exige el entendimiento de la dimensión cobrada por la era imperialista al completar casi un siglo conceptúa sólo una etapa, la primera e insoslayable etapa de un combate radiado y secular por la liberación total de la mayoría de tales pueblos.

Y es que el verdadero desarrollo exige como nunca antes la total independencia económica, la equidad social, la liquidación del neocoloniaje cultural y el ejercicio de la soberanía sobre los recursos económicos nacionales en interés ya no digamos de los propios pueblos sino de las mayorías que en cada uno de ellos siguen padeciendo el flagelo de la explotación, el hambre, la enfermedad y la ignorancia, mientras unos cuantos —propios y sobre todo extraños— se benefician con los resultados de la vinculación profunda de aquéllos a un artificial destino de extraños en su propia tierra.

Esto es así porque el imperialismo hoy como el colonialismo ayer ha sembrado y hecho fructificar la dependencia económica y ha maniatado la precaria independencia política de los incipientes Estados nacionales que comenzaron a gestarse en lo que va de la segunda mitad del siglo xx, sobre todo en África y Asia.

Junto a las persistentes y numerosas agresiones de la economía imperial y sus bloqueos comerciales, tecnológicos, financieros y castrenses se ha vuelto a esgrimir, en detrimento de la libre autodeterminación de los pueblos en desarrollo, la política de gran garrote «justificada» en el odioso concepto de equilibrio internacional de poder, que están en condiciones de postular y hacer cumplir sólo las potencias hegemónicas capaces de esgrimir a la vez el chantaje de la tecnología y las armas atómicas.

Mientras tanto, la deuda externa de los países pobres asciende a casi 500 mil millones de dólares, y aun se les sigue trasladando la endemia de la especulación y la inflación de las áreas desarrolladas por la vía de un comercio exterior que, por lo demás, va cerrando cada vez más el cerco de las discriminaciones comerciales, las protecciones arancelarias, las violaciones abiertas a los regímenes y pro-

gramas institucionales de ayuda y el deterioro artificioso de los precios y las condiciones del transporte de las materias y productos provenientes del mundo del subdesarrollo.

Frente a esta situación, la Asociación de Economistas del Tercer Mundo, reunida en su II Congreso celebrado en La Habana del 26 al 30 de abril último, se declaró movilizadora para servir a estos pueblos mediante la acción política, la acción económica, la investigación científica más avanzada, la reflexión más vigilante y la aplicación práctica de la teoría del desarrollo al servicio de las mayorías, pues es ya históricamente inaceptable un «orden» económico internacional en el que prevalezcan tales vicios y amenazas.

Casi al unísono, del 6 al 9 de mayo, los economistas de México se reunieron en Guadalajara en su IV Congreso Nacional en el que abrieron un extenso debate tendiente a interpretar los sentimientos de la nación en torno a la libertad, la soberanía, la justicia, el progreso, la democracia y el bienestar común, aspiraciones por las que el pueblo mexicano ha luchado a lo largo de su historia.

Allí se sostuvo que el proyecto nacional enfrenta dos cuestiones fundamentales: por un lado la desigualdad en todas sus manifestaciones y el grado de autonomía que la nación y el Estado pueden ejercer para conducir el rumbo y la naturaleza del desarrollo económico, político y social, y, por otro lado, la articulación del país dentro del ámbito de las relaciones económicas internacionales, en un mundo que se debate bajo el signo de la crisis.

Con un marco constitucional que puede dar cauce a las aspiraciones de todos los mexicanos, los recursos naturales, la estructura productiva y la fuerte presencia del Estado conforman —según los economistas mexicanos reunidos en Guadalajara— un complejo que sólo requiere de la voluntad política de toda la sociedad para llevar adelante un programa socioeconómico y político en el que, acorde al interés manifiesto de las organizaciones sociales que el pueblo ha decidido y decida darse, se puedan dar pasos significativos hacia el desarrollo social pleno.

El propósito oficial de edificar un amplio y vigoroso aparato económico, sólo tiene sentido, según la declaración final que incluyen los economistas mexicanos en la relatoría general de su IV Congreso Nacional, si sobre la marcha se traduce en ascendentes y concretos niveles de bienestar para las mayorías trabajadoras de México pues “la responsabilidad histórica de esta generación consiste en heredar a la próxima un país que asegure a todos los mexicanos, por el simple hecho de serlo, cinco garantías sociales básicas: alimentación, empleo, salud, educación y vivienda, garantía cuyo cabal cumplimiento habrá

de acreditar la validez de la estructura económica que las propicia y preserva”.

Cabe reflexionar en que de no alcanzarse la meta de tales garantías sociales básicas en el transcurso de una a otra generación, se habrá confirmado el entredicho a que se enfrenta desde hace ya varias décadas la estructura política prevalente en México, estructura que de una u otra manera se inserta en el ámbito de la interdependencia en que se gesta el subdesarrollo y la dependencia de un «Tercer Mundo» en cuya defensa salieron los economistas reunidos en La Habana, y entre quienes estaban muchos de los economistas mexicanos que una semana después se reunieron en Guadalajara.